

ASUNTO: SE PRESENTA ACCIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Ciudad de México, 03 de abril de 2022.

H. MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
PRESENTE:

MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, personalidad plenamente acreditada ante ese Alto Tribunal, tal como se evidencia en el sitio oficial del Instituto Nacional Electoral consultable en: <https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/>; y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] y acreditando desde este momento, con fundamento en el artículo 11, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley a los a los profesionistas [REDACTED]

[REDACTED] y [REDACTED], ante ustedes respetuosamente comparezco a exponer:

Que por medio del presente escrito, con la representación que ostento, y con fundamento en el artículo 105, fracción II, primer y segundo párrafos, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 10, fracción I y 11 en relación con el 59; 60; 61; 62, tercer párrafo; y demás relativos aplicables de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38º inciso a) y demás aplicables del Estatuto de MORENA, vengo a interponer

-----ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD-----,

en los términos que a continuación se hacen valer, y en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 61 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria, manifiesto lo siguiente:

ACTOR: MORENA, promoviendo por conducto del suscrito Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

ÓRGANOS RESPONSABLES.-

- a. **Legislativo:** LXXVI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que expidió el decreto que contiene las normas generales impugnadas.
- b. **Ejecutivo:** El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que promulgó y mandó publicar el decreto que contiene las normas generales cuya declaración de invalidez se solicita.
- c. **Director del periódico Oficial del Estado de Nuevo León.**

NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA.- Lo constituye el Decreto Número 097¹, que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; y reforma, adiciona y deroga diversos preceptos de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, de los cuales, en los términos planteados en el apartado de conceptos de invalidez, se impugnan:

- a. El artículo 44 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Nuevo León
- b. Los artículos 9; 44 fracción I; 73; 74 segundo párrafo; 79 párrafo segundo; 81 bis; 81 bis 2; 81 bis 3, fracción II; 144 párrafo tercero; 207 fracción III; 239 fracción II; 348 primer párrafo; y 348 Bis, incisos a), fracción II, b) fracción II, c) fracción II, d) fracción II, e) fracción II, f) fracción III, g) fracción II y h) fracción II, todos estos de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

MEDIO OFICIAL EN QUE FUERON PUBLICADAS LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS.- Es el periódico oficial del Estado de Nuevo León en su edición del Viernes 4 de Marzo de 2022, el cual se puede consultarse en el siguiente enlace:

http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00170400_000001.pdf

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES VIOLADOS.- Lo son los artículos 1o.; 6o.; 7o.; 14; 16; 35; 39; 40; 41; 115; 116; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las demás normas constitucionales citadas en el presente escrito y los preceptos 1; 2; 23.1; 24; 27 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros que se invocan en el apartado de conceptos de invalidez.

¹ Decreto consultable en el enlace:

http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00170400_000001.pdf

Lo anterior, conforme a los siguientes

ANTECEDENTES:

Primero.- El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política- electoral."

Segundo.- El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos y otros ordenamientos.

Tercero.- El viernes 4 de Marzo de 2022 se publicó en el periódico oficial del Estado de Nuevo León el decreto número 97, expedido por la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso de dicho Estado, que contiene las normas generales impugnadas de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y de la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas.

Cuarto.- La publicación del Decreto que contiene las normas generales referidas en el punto Tercero que antecede, fue realizada previa su promulgación por el Gobernador Constitucional del Estado, pero algunas de sus normas generales, por no ser conformes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o con los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, en este escrito se combaten.

Lo expuesto con antelación de lugar a los siguientes:

CONCEPTOS DE INVALIDEZ.-

PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ, por el cual se impugna el artículo 44 párrafo primero de la Constitución del Estado de Nuevo León, que ordena establecer el Tribunal Electoral del Estado, como un órgano jurisdiccional independiente con autonomía funcional y presupuestal para conocer y resolver las impugnaciones y controversias que se susciten "*dentro de los procesos electorales*" de la competencia estatal o con motivo de la impugnación de los resultados del mismo. Lo que afecta los principios de certeza, independencia y legalidad electorales, así como las garantías de seguridad jurídica, legalidad, competencia, exhaustividad, motivación y fundamentación, si el legislador ordinario decide.

El precepto de la Constitución de Nuevo León cuya invalidez se plantea declarar en la parte que se subraya, dice:

Art. 44.- Para conocer y resolver las impugnaciones y controversias que se susciten dentro de los procesos electorales de la competencia estatal o con motivo de la impugnación de los resultados de los mismos, se establecerá en el estado un órgano jurisdiccional independiente con autonomía funcional y presupuestal, que se denominará Tribunal Electoral del Estado, y que tendrá a su cargo el desahogo de los recursos y la resolución de las controversias que se planteen en la materia con plenitud de jurisdicción en sus resoluciones. La ley establecerá sus atribuciones, forma de organización y funcionamiento del mismo.

...

...

Consideraciones jurídicas.

En efecto, el primer párrafo del artículo 44 de la constitución neoleonesa es inconstitucional y contraventor de lo dispuesto en los artículos 40, 116 fracción IV, inciso c), punto 5o., 124 y 133 de la Carta Magna, porque eventualmente limita la duración del órgano jurisdiccional

electoral del Estado a conocer y resolver impugnaciones y controversias que se susciten "dentro de los procesos electorales locales" o por "la impugnación de los resultados" de los mismos".

Porque, puede entenderse en el sentido de que la ley secundaria de la materia, o una reforma ulterior a esta, que emita el legislador ordinario, pueden reducir la duración del desempeño y la resolución de impugnaciones y controversias competencia del Tribunal Electoral estatal solo dentro de los procesos electorales.

Por ende, a menos que se considere una interpretación conforme, en el sentido de que el tribunal electoral estatal se establecerá para conocer y resolver, en cualquier tiempo, todas las impugnaciones y controversias electorales dentro de su competencia, y no únicamente las relacionadas con los procesos comiciales, es de concluir que la norma actual del primer párrafo del artículo 44 de la constitución neolonesa es deficiente en la medida que limita el conocimiento y resolución de tales controversias e impugnaciones a aquéllas que se susciten dentro de los procesos electorales de su competencia o con motivo de sus resultados, de manera que si no es dable entenderlo en una interpretación conforme que aclare y supere el vicio de invalidez, debe declararse inconstitucional la parte que se impugna o cualquier otra cuya invalidez dependa de la impugnada.

Se solicita de ese Alto Tribunal Constitucional, se pronuncie al respecto, considerando *inter alia* el marco normativo aplicable, que atiende a la garantía de los justiciables de contar con un órgano jurisdiccional electoral local que funcione en forma permanente de conformidad con los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone al respecto:

- Que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (Artículo 14 segundo párrafo). Garantía que se incumpliría si el tribunal electoral no funciona más allá del tiempo de los procesos electorales, aun cuando en cualquier otro tiempo pueden suscitarse actos o resoluciones electorales que vulneren derechos políticos o electorales de la ciudadanía o derechos de los partidos políticos o de sus afiliados, o bien los relacionados con el ejercicio del cargo de quienes resulten electos, reconocidos en los artículos 35, 41, 116, 122 y en otros de la Carta Magna, así como en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados en la materia de los que México es Parte.
- Que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (Artículo 16 primer párrafo, en su parte inicial). No obstante, si una autoridad incompetente o competente emite un acto o resolución inmotivada o infundada que vulnere los derechos enunciados con antelación y esto ocurre fuera de los procesos electorales, por ejemplo, durante un proceso de consulta popular local, no podría el tribunal electoral estatal conocer y resolver tales controversias e impugnaciones, si se establece sólo para los procesos electorales y sus resultados.
- Que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. (Artículo 40), y que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, ... (Artículo 115 primer párrafo, en su parte inicial). En ese sentido, la deficiente regulación de la norma local deja de garantizar el principio federalista y

democrático, si existe en la norma del artículo 44 de la constitución neolonesa, la orden de establecer un tribunal que funcione de manera intermitente, pues de ese modo se pone en riesgo la garantía de independencia y el principio reconocido en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional en el sentido de que las autoridades mexicanas tienen obligación, en el ámbito de sus respectivas competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe, *inter alia*, prevenir y reparar las violaciones a tales derechos, en los términos que establezca la ley, por ejemplo, los derechos políticos y las garantías indispensables de acceso a la justicia, pues de otro modo, en caso de establecerse un órgano jurisdiccional local en forma solo temporal y no permanente, podrían quedar suspendidos esos derechos no obstante que el artículo 29 constitucional en su párrafo segundo prohíbe, aun en estados de excepción, suspenderlos o restringirlos.

- Que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, y que, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que ... Las autoridades... jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones... se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley, y que se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. (Artículo 116 párrafo segundo, fracción IV, incisos c), punto 5o. y l). Pues aun cuando, *prima facie*, los poderes estatales se organizan conforme a su Constitución particular, la organización del tribunal electoral de cada Estado, debe ser conforme con las bases constitucionales y de las leyes generales en la materia, de tal modo que

garanticen autonomía e independencia en su funcionar, así como que la integración impar de sus magistrados que nombre el Senado de la República cumpla el objeto del sistema de medios de impugnación en esa materia, para que todos los actos y resoluciones electorales, independientemente del tiempo en el que se emitan, se sujeten siempre al principio de legalidad. Lo cual no ocurre si se establece un órgano jurisdiccional que solo funcione durante los procesos comiciales.

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce al respecto:

- Que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación... o para la determinación de sus derechos y obligaciones... de cualquier otro carácter. (Artículo 8.1), pero si esos derechos y deberes político electorales, o incluso los derivados de procedimientos sancionadores especiales del orden local, entre otros, solo están garantizados en tiempos de proceso electoral, no ampararía los casos que se susciten fuera de los mismos, por lo que no se atiende en la norma impugnada a esa garantía judicial.
- Que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. (Artículo 25 primer párrafo). No obstante, esa garantía de protección judicial no puede garantizarse en el caso de establecer un tribunal electoral local que solo conozca y resuelva controversias e impugnaciones de su competencia dentro de los procesos electorales o con motivo de sus resultados, y no las que se susciten en otra temporalidad.

Por lo que respecta a las bases de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta es clara al señalar, entre otras cosas, que:

- Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. (Artículo 105.1)
- Las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de tres o cinco magistradas y magistrados, según corresponda, observando el principio de paridad, alternando el género mayoritario, actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, de conformidad con lo que establezca la Constitución de cada estado y de la Ciudad de México. (Artículo 106.1)
- Los magistrados electorales serán los responsables de resolver los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales, en términos de las leyes locales. (Artículo 106.3)
- Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquéllos en que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional local, y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. (Artículo 107.1)
- Los magistrados electorales estatales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica.

De esta manera, si conforme a dichas normas legales, los magistrados electorales locales son nombrados por el Senado para permanecer en su encargo durante siete años, sin que durante el mismo puedan tener otro empleo cargo o comisión (salvo algunos por excepción), y gozan de todas las garantías judiciales constitucionales para garantizar su independencia y autonomía, las cuales, por lo menos, son: la permanencia y estabilidad en el ejercicio de su encargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica, aunado a que estos son los responsables de resolver todos los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales, es inconcuso que, de establecerse según la norma impugnada un tribunal electoral estatal que conozca y resuelva únicamente dentro de los procesos electorales o con motivo de sus resultados tales controversias e impugnaciones, entonces no se garantiza que las resuelvan todas ni en todo tiempo. Lo cual es contrario a las garantías que dichos preceptos de la ley general ampara.

Por consiguiente, siendo la deficiente e irregular regulación en el primer párrafo del artículo 44 de la constitución local cuyo contenido se impugna en la porción normativa que ha quedado precisada, y en atención a que su contenido que expresa los procesos electorales contraviene asimismo el principio de supremacía dispuesto en el artículo 133 de la Constitución federal, por las razones con antelación aducidas, se solicita de ese Tribunal Pleno declare la invalidez de dicha disposición, sin perjuicio de la interpretación conforme que procediere.

SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ, por el cual se impugnan los artículos 44 fracción I, 348 primer párrafo; y 348 Bis, incisos a), fracción II, b) fracción II, c) fracción II, d) fracción II, e) fracción II, f) fracción III, g) fracción II y h) fracción II, todos estos de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, que calculan el monto del financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos, a través de una fórmula aplicada sobre un porcentaje del salario mínimo diario vigente en la ciudad de Monterrey, multiplicado por el número de electores inscritos en el padrón electoral, y no

Página 11 de 45

por el valor diario de la *Unidad de Medida y Actualización*, así como al imponer multas por días de salario mínimo general vigente.

Los preceptos de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León cuya invalidez se solicita declarar en las porciones normativas subrayadas, por deficiente regulación u omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio, respectivamente establecen:

Artículo 44. ...

I. El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral presupuestará para el financiamiento público de los partidos políticos una cantidad mínima resultante del sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en Monterrey por el número de electores inscritos en el padrón electoral del Estado, para actividades ordinarias permanentes de los partidos, la que se distribuirá de acuerdo al orden siguiente:

a. a b. (...)

(...)

Artículo 348. En los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, el superior jerárquico, Contraloría u órgano interno de control correspondiente impondrá multa de quinientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey, al servidor público que:

(...)

Artículo 348 Bis. A quien cometa violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, será sancionado según corresponda conforme a lo siguiente:

a) Respecto a los partidos políticos:

(...)

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior.

(...)

b) Respecto de las agrupaciones políticas:

(...)

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey, según la gravedad de la falta, y

(...)

c) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

(...)

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey,

(...)

d) Respecto de los candidatos independientes:

(...)

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey,

(...)

e) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos o de cualquier persona física o moral:

(...)

II. Con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey,

- f) Respecto de los observadores electorales u organizaciones de observadores electorales:

(...)

III. Con multa de hasta doscientos días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey, tratándose de las organizaciones a la que pertenezcan los observadores electorales.

- g) Respecto de las organizaciones que pretendan constituir partidos políticos:

(...)

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey, según la gravedad de la falta, y

(...)

- h) Respecto de las organizaciones sindicales, laborales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos:

(...)

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey, según la gravedad de la falta.

Preceptos violados. Artículos 26 Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 41 base II, inciso a) y 123 Apartado A, fracción VI, párrafo segundo, en relación al DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

Consideraciones jurídicas.

En efecto, a partir de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, el artículo 123, Apartado A, fracción VI de la Constitución dispone *que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza*, en tanto que en su artículo 26 apartado A, párrafos sexto y séptimo, señala que el organismo encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional Nacional de Información Estadística y Geográfica (el INEGI) calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como *unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia* para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes.

En ese tenor, al perseguir un fin ajeno a la naturaleza del valor del salario mínimo, es que, en el mismo Decreto de reforma constitucional de 27 de enero de 2016 se modificó el artículo 41, base II, párrafo segundo, inciso a) de la Constitución mexicana, que establece la fórmula para fijar anualmente el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos.

Como elemento de ese cálculo, se sustituyó el porcentaje del salario mínimo general vigente diario vigente en el entonces Distrito Federal, por el del valor diario de la UMA, para quedar así, en su literal:

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos

en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

De ahí que sea inconstitucional el hecho de que el legislador local, al modificar mediante decreto de 04 de marzo de este año los artículos 44, 348 y 348 Bis de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, porque omitió adecuar su contenido para fines de determinación del financiamiento público ordinario destinado a las actividades permanentes de los partidos políticos, así como para la imposición de multas por infracciones a la normativa electoral, y en la medida que sigue calculando esa distribución y cobros sobre la base de días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey.

Cabe decir de todo esto que el propio Decreto de la Reforma a la Constitución federal en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, dispuso en sus artículos transitorios Tercero y Cuarto, lo siguiente:

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor

de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Ahora bien, no es óbice para considerar lo anterior, el hecho de que la Ley General de Partidos Políticos mantiene aún en la redacción de su artículo 51.1, inciso a), fracciones I y II, el concepto de salario mínimo general para fines de cálculo del financiamiento público de los partidos políticos, aunado a que, por su parte, el artículo 456.1 incisos a), fracción II, b) fracción II, c) fracción III, d) fracción II, e) fracciones II, III y IV, f) fracción III, g) fracción II, h) fracción II e i) fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, incurre en la misma omisión, al establecer en días de salario mínimo general los montos de las multas aplicables a distintos sujetos infractores de las normas electorales.

Ello porque, como se ha dicho, el Constituyente Permanente en la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional, prohibió utilizar el salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, pues en cambio, la atribución de calcular los salarios mínimos anualmente, aunque por una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) es garantizar un derecho humano como mínimo vital para que todo jefe de familia TRABAJADOR pueda contar con medios económicos suficientes para satisfacer sus necesidades normales, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Por lo cual se trata de que los salarios recuperen su poder adquisitivo perdido por muchos años en nuestro país.

En cambio, los fines del financiamiento público a PARTIDOS POLÍTICOS claramente son distintos, pues, en este caso, la asignación de ese recurso tiene por finalidad, garantizar la permanencia de los partidos políticos, como medio para que alcancen sus objetivos previstos

en el artículo 41 constitucional, es decir: promover la participación del pueblo en la vida democrática.

Por otra parte, en el caso de las multas, estas tienen por finalidad cumplir lo ordenado en los artículos 116 fracción IV, inciso o), y 134 último párrafo de la Ley Suprema de la Unión, es decir, y la sanción que se impone mediante multas, es parte del *ius puniendi*, o potestad del Estado de castigar a quienes incumplen o infringen la ley.

De modo que, si la Carta Magna prohíbe expresamente utilizar el valor salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y la finalidad del cálculo del financiamiento público ordinario de los partidos para solventar los gastos por actividades permanentes, así como la de las multas imponibles por infracciones a la normativa electoral, son muy distintas, existiendo además el mandato expreso de ejercicio obligatorio que, en su artículo cuarto transitorio, asigna competencia a las Legislaturas de los Estados, entre otros destinatarios, para

... realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Puede colegirse, entonces, que las modificaciones efectuadas a los preceptos legales 44, 348 y 348 Bis. de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León no han tenido el alcance de cumplir el mandato del Constituyente Permanente, y toda vez que el plazo conferido a tales efectos a la Legislatura de dicho Estado ha concluido el 27 de enero de 2017, está en omisión

legislativa inconstitucional de carácter relativa y en competencia de ejercicio obligatorio, o bien, puede estimarse que al modificar el contenido de dichas normas legales lo hizo deficientemente, pero en todo caso, el Decreto número 097, de 04 de marzo, publicado en el periódico oficial del Estado de Nuevo León, acusa una invalidez parcial, por no ser conforme con las normas constitucionales invocadas. Lo que da lugar a la declaración correspondiente de ese Tribunal Constitucional, como se solicita en este medio de control de la constitucionalidad a efecto de que se ordene al órgano legislativo local, subsane las deficiencias u omisión inconstitucional en que incurrió.

Como ha sido planteado, no es óbice el hecho de que las leyes generales electorales fijen en salarios mínimos la base para la imposición de multas y para calcular el financiamiento público de los partidos políticos, porque en este caso, el parámetro de validez y control de la regularidad de las normas generales impugnadas lo es directamente la Constitución, a cuyas bases debe adecuarse toda norma inferior, la cual ordena que para asuntos ajenos a la naturaleza del salario mínimo como índice, unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia es la Unidad de Medida y Actualización expresada en un valor diario cuyo monto determina el INEGI y no la CONASAMI.

Pues, en todo caso, si el primer párrafo del artículo 44 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, que aplica a la porción normativa impugnada en primer término, dispone que

El financiamiento público a los partidos políticos con registro nacional o local se otorgará mediante la asignación presupuestal que determine el Congreso del Estado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos Políticos, y demás leyes aplicables conforme a lo siguiente:

(...)

Y es la Constitución federal el ordenamiento que establece, en su artículo 41 fracción II, inciso a), el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y ha sustituido al salario mínimo, es claro que esa asignación presupuestal debe ser calculada en UMAs, no en minisalarios.

Por otra parte, si el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 constitucional, señala que es de conformidad con la Constitución federal que las constituciones y leyes electorales de los Estados deben garantizar, entre otras cosas, que *“Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.”*

Al omitir disponer en qué elementos debe el legislador local basar normativamente el cálculo para determinar el financiamiento público destinado a actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, y al disponer la Ley Electoral una remisión expresa a su determinación por el Congreso del Estado sea de acuerdo con la Constitución federal, entonces no hay duda que las normas legales deben disponer la asignación presupuestal para ese tipo de financiamiento público, calculado en un sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización multiplicado por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

En las relatadas condiciones, por estimar fundado el presente concepto de invalidez solicito de ese Tribunal Pleno declare la invalidez de los artículos 44 fracción I, 348 primer párrafo; y 348 Bis, incisos a), fracción II, b) fracción II, c) fracción II, d) fracción II,

e) fracción II, f) fracción III, g) fracción II y h) fracción II, todos estos de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, para los efectos que en la sentencia se determine.

TERCERO CONCEPTO DE INVALIDEZ, a través del cual se impugnan los artículos 73 primer párrafo, 74 párrafo segundo, 79 párrafo segundo y 81 bis de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, que regulan coaliciones en el ámbito estatal. Sin embargo, el Congreso del Estado es incompetente para legislar sobre coaliciones.

Ello que se aparta del mandato del Constituyente Permanente que, en la fracción I, inciso f) artículo segundo transitorio del *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia política-electoral*, reservó atribución exclusiva al Congreso de la Unión a fin de establecer el sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones.

Los preceptos legales cuya invalidez se plantea invalidar, dicen:

Artículo 73. En los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas o planillas en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y en esta Ley.

...

Artículo 74. ...

Se entiende por coalición la unión o alianza transitoria de dos o más partidos políticos, con el propósito de postular candidaturas a los cargos de representación popular en una elección. Los

partidos políticos que se coaliguen, para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos de este capítulo.

(...)

Artículo 79. ...

(...)

Para el caso de la elección de Diputaciones y Ayuntamientos, contendrá además el señalamiento del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo legislativo o partido político a que pertenecerán en el caso de resultar electos. Ningún partido político integrante de la coalición podrá postular como propios, en las candidaturas que le corresponden dentro de esta, a candidatos que sean militantes de cualquiera de los demás partidos políticos que integren la coalición.

Artículo 81 bis. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir coaliciones o candidaturas comunes con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección inmediata posterior a su registro según corresponda.

Preceptos violados.- Son los artículos 1o., 41 base V, apartados B., punto 5 y C., puntos 3, 4, 116 fracción IV, incisos b) y j), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f) del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Consideraciones jurídicas.

Es inconstitucional la regulación de los artículos 73, 74 párrafo segundo, 79 párrafo segundo y 81 bis de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, por incompetencia del Legislativo local para legislar sobre coaliciones, pues tal regulación en la ley electoral local se aparta de lo ordenado por el Constituyente Permanente, como atribución exclusiva del Congreso de la Unión, en el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f) del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, y contraviene las bases previstas al efecto en los artículos 85 al 92 de la Ley General de Partidos Políticos, con vulneración de lo establecido en el acápite del artículo 116 fracción IV.

En efecto, las normas de la Ley Electoral impugnadas en tanto regulan coaliciones electorales, son inconstitucionales y deben declararse inválidas, pues, pues en el inciso f) de la fracción I del artículo segundo transitorio invocado, el Poder de Reforma Constitucional, de 10 de febrero de 2014, mandató únicamente al Congreso de la Unión a establecer, por lo menos, en la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), el sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:

- Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales
- Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas
- La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo

proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral

- Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos
- En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse

Tal mandato fue cumplido en el decreto de 23 de mayo de 2014 por el Congreso de la Unión, en la LGPP que detalla las bases constitucionales mínimas de su regulación, ello en los artículos 85 al 92, razón por la cual no es facultad de los Estados legislar al respecto.

Por ende, es contrario al principio de supremacía constitucional e invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, única autoridad legislativa facultada para regular la forma de participación o asociación electoral relativa a las coaliciones entre los partidos políticos, o bien del INE en cuanto hace a los formatos, reglas y lineamientos sobre materiales electorales a emplear en procesos electorales federales y locales.

Como quedó dicho, fue mandato expreso del Constituyente Permanente al Congreso de la Unión que el sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, se regularía en una ley general sobre partidos políticos nacionales y locales, y que al efecto, dispondría las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos.

Lo que evidentemente excluye la posibilidad de que dicha figura jurídica se establezca en una ley local, y consecuentemente el texto supremo no reconoce competencia a las legislaturas de los Estados de la República para legislar en torno a las coaliciones.

Considero que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014, y sus acumuladas, 26/2014, 28/2014 y 30/2014, cuya sentencia se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 13 de agosto de 2015, analizó en su Considerando Vigésimo Sexto, el contenido normativo del artículo segundo transitorio del Decreto de reformas constitucionales, líneas arriba señalado, en el sentido de que, en ese precepto, el Constituyente Permanente determinó el contenido de las leyes generales a que hace referencia la fracción XXIX-U del artículo 73 constitucional, y concluyó diciendo que:

Del precepto citado, se desprende, en lo que a este punto interesa, que, respecto de la participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de las coaliciones, la Constitución ordena al legislador federal el establecimiento de un sistema uniforme para los procesos electorales federales y locales, que prevea (i) la solicitud de registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; (ii) la existencia de coaliciones totales, parciales y flexibles, conforme al porcentaje de postulaciones de candidaturas en un mismo proceso bajo una misma plataforma; (iii) la manera en que aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades de escrutinio y cómputo de los votos; y (iv) la prohibición de coaligarse en el primer proceso electoral en que participe un partido político.

En este sentido, para efectos del análisis constitucional de los asuntos derivados de la reforma político-electoral de diez de febrero de dos mil catorce, debe concluirse que:

El régimen de coaliciones aplicable tanto a procesos federales como locales, por disposición constitucional, debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la ley general que expida en materia de partidos políticos; sin que las entidades federativas cuenten, por tanto, con atribuciones para legislar sobre dicha figura.

De este modo, la Ley General de Partidos Políticos, expedida por el Congreso de la Unión mediante Decreto publicado en el Diario Oficial el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Capítulo II “De las Coaliciones” (artículos 87 a 92) del Título Noveno “De los Frentes, las Coaliciones y las Fusiones”, prevé las reglas a las que deberán sujetarse los partidos que decidan participar bajo esta modalidad en los procesos electorales federales y locales; sin asignar a las entidades federativas facultad alguna para legislar en torno a algún aspecto no contemplado por dicha ley respecto de tal figura.

Consecuentemente, las entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la Constitución, ni por la Ley General, para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos sobre esta figura, ya que el deber de adecuar su marco jurídico-electoral, impuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General de Partidos Políticos, no requiere la reproducción de dichas disposiciones a nivel local, si se considera que la citada ley es de observancia general en todo el territorio nacional.

Por tanto, toda regulación sobre coaliciones que se contenga en las leyes de las entidades federativas será inválida desde un punto de vista formal, por incompetencia de los órganos legislativos locales.

En ese contexto, resulta indudable que el legislador local neoleonés al modificar las normas generales impugnadas para regular diversos aspectos en materia de coaliciones incurrió en vulneración a los principios fundamentales de legalidad y supremacía constitucional, y deben por ende ser declarados inválidos, por infringir lo establecido en el reiterado artículo segundo transitorio.

Estimo entonces que el legislador local infringe también lo establecido en el artículo 16 primer párrafo de la Carta Magna, pues todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente, y debe ser fundado y motivado.

De igual modo con la emisión de los preceptos legales impugnados, el legislativo de dicha entidad federativa se aparta de lo previsto en el artículo 124 constitucional, que dispone que (solo) las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias, pero, en el caso, la competencia para regular el sistema uniforme de coaliciones sí está, de manera expresa, constitucionalmente conferida al Congreso de la Unión. Razón por la cual, no puede entenderse reservada a los Estados.

En ese tenor, considero se debe emitir la correspondiente declaración de invalidez por ese Tribunal Pleno, respecto de los artículos 73 primer párrafo, 74 párrafo segundo, 79 párrafo segundo y 81 bis de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, y en su caso extender esa declaración a otros preceptos legales cuya aplicabilidad depende de los declarados inconstitucionales.

CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ, por el cual se impugna el artículo 81 Bis 2, que entre otras cosas establece que el convenio de candidatura común debe ser suscrito por los representantes y dirigentes de partidos políticos y presentarse para su registro ante el Presidente de la Comisión Estatal Electoral, a más tardar treinta días antes del inicio de precampaña de la elección de que se trate. Lo cual conlleva infracción al principio de uniformidad de las alianzas electorales y al plazo límite para solicitar su registro en igualdad de condiciones las candidaturas comunes frente a las coaliciones.

El precepto legal cuya invalidez se plantea declarar en la porción normativa subrayada, dice:

Artículo 81 bis 2. Los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de Gobernador o para planillas de

Ayuntamientos, para lo cual deberán suscribir un convenio firmado por sus representantes y dirigentes, mismo que presentarán para su registro ante el Presidente de la Comisión Estatal Electoral, a más tardar treinta días antes del inicio del periodo de precampaña de la elección de que se trate.

Preceptos violados. Artículos 1o., 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 35 fracción II, 40, 41 base I, 115 primer párrafo, 116 fracción IV, inciso b), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 1, 2, 16.1, 23, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás preceptos, principios y garantías invocados en este apartado.

Consideraciones jurídicas.

En efecto, la disposición impugnada infringe el principio de uniformidad de las alianzas electorales, así como el de analogía, al disponer como plazo límite para que los partidos políticos soliciten el registro de convenios de candidatura común para la elección de Gobernador o de Ayuntamientos, a más tardar "treinta días antes" del inicio del periodo de precampaña "de la elección de que se trate".

Regulación que se aparta de lo previsto en el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f) puntos 1 y 2 del de la Reforma política-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que señala que el Congreso de la Unión debe establecer un sistema uniforme de coaliciones, radicando la similitud en que:

- tanto los aspirantes a candidatos de coalición como los de las candidaturas comunes harán precampañas en forma simultánea,

- tanto las coaliciones como las candidaturas comunes son formas de participación o asociación entre partidos políticos para postular, cada una, a los mismos candidatos en un mismo proceso electoral, y
- en ambos supuestos los partidos políticos firmarán convenio que presentarán ante el OPL y la candidatura será seleccionada dentro del proceso interno de cada partido político, cuyas precampañas inician al mismo tiempo
- aunado, mediante el ejercicio de la facultad de atracción previsto en el artículo 41 constitucional, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral suele fijar la misma fecha para la conclusión de las precampañas de todos los candidatos y candidatas
- asimismo, las candidaturas independientes solicitan el respaldo ciudadano durante el mismo plazo previsto para las precampañas
- todas las candidaturas se registran en el mismo plazo por tipo de elección y hacen campaña electoral durante los mismos períodos según la elección de que se trate
- los tiempos de inter campañas son los mismos para todos

Es de sentido común que, para el plazo límite de presentación de los respectivos convenios, debe regir la misma norma, mediante interpretación por analogía; es decir que:

"En igualdad o en similitud de supuestos de supuestos, deben regir iguales disposiciones"

De manera que, tanto los partidos políticos que suscriban convenio de coalición o candidatura común como los que no, dispongan del mismo tiempo dentro del proceso electoral para pactar con otros partidos la forma de participación o asociación electoral que más les convenga y para seleccionar sin ventaja o desventaja indebidas a sus candidaturas.

En el caso, si la norma del artículo 81 bis 2, señala el plazo límite de presentación de convenios de candidaturas comunes y el segundo transitorio de la reforma constitucional en materia política electoral, de 10 de febrero de 2014, señala como parte del sistema uniforme de coaliciones, que los convenios respectivos se han de presentar a más tardar en la fecha de inicio de la etapa de precampañas, debe concluirse que, a más tardar en esa fecha deben presentarse también las solicitudes de registro de los convenios de candidatura común, de tal forma que los partidos que pacten una u otra forma de alianza electoral, gocen de iguales condiciones de competencia política y haya simultaneidad.

Suponer que es válido que los convenios de candidatura común se presenten para su registro ante el Presidente de la Comisión Estatal Electoral a más tardar 30 días antes de la fecha de inicio de la etapa de precampañas, como señala el precepto legal impugnado, y pretender que, en cambio, las solicitudes de registro de convenios de coalición sigan la ruta constitucional de presentación a más tardar al inicio del período de precampañas constituye una distinción que nos parece inadmisibles, porque entonces unos partidos que hayan intentado candidatura común y no lo consigan, podrían luego pactar coalición con los mismos u otros partidos; lo cual representa una ventaja indebida y desigualdad, siendo lo justo que arranquen al mismo tiempo y, por lo tanto, que dispongan de los mismos plazos, sea coalición, candidatura común o candidatura independiente.

De ahí que, al existir antinomia en supuestos de trato diferente, se afecta a las candidaturas comunes, mientras se favorece las coaliciones, no obstante que las primeras son de orden estatal, según lo previsto en el artículo 85.5 de la Ley General de Partidos Políticos, norma que está en el mismo capítulo que rige a las coaliciones, frentes, fusiones y otras formas de participación y asociación entre partidos políticos, es decir, a contexto normativo igual, condiciones de aplicabilidad similares.

Lo cual se traduce en inseguridad jurídica y en desigualdad de trato no justificado frente al supuesto de registro de convenios de coalición, porque las coaliciones dispondrán de mayor tiempo.

Además, al establecer que los partidos (solo) podrán presentar la solicitud de registro de convenios de candidatura común ante el Presidente de la Comisión Estatal Electoral, u OPL, pero, al no reconocerse al Secretario Ejecutivo la atribución referida en el supuesto de ausencia de aquél, se podría dar lugar a situaciones conflictivas, con transgresión también a los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, ello en caso de estar ausente el Presidente.

Ello porque el artículo 92.1 de la Ley General de Partidos Políticos, en ese aspecto, atiende a que, eventualmente, el Secretario del OPL reciba la solicitud de registro referida en ausencia del Consejero Presidente. Por lo que debe regir en analogía de supuestos, disposiciones iguales para la presentación de la Candidatura común y las Coaliciones.

Inclusive, del contenido normativo de la parte final del primer párrafo del artículo 42 de la Constitución de Nuevo León, que informa que, “... *Los partidos políticos nacionales o con registro en el estado gozarán para todos los efectos legales de personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que administrarán libremente; teniendo el derecho para solicitar el registro de candidatos, fórmulas, planillas y listas, por sí mismos, en coalición, o en candidatura común con otros partidos, a fin de participar en los procesos electorales, en los términos que prevea la Ley Electoral.*” se desprende con claridad que el constituyente local da el mismo trato a los partidos políticos en eso de solicitar el registro de candidatos, ya sea que contiendan por sí mismos, en coalición o en candidatura común.

De manera que, aunque esta norma local no establece una previsión de plazo límite para el registro de los convenios respectivos, es claro que confiere el mismo derecho a las diversas formas de asociación y participación electoral.

Por lo tanto, al ser fundado este concepto de invalidez, se solicita de ese Tribunal Pleno se pronuncie al respecto.

QUINTO CONCEPTO DE INVALIDEZ, por el cual se impugna el artículo 81 bis 3, fracción II de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, que dispone que el convenio de candidatura común debe contener *“La manifestación por escrito de proporcionar a la Comisión Estatal Electoral, una vez concluidos sus procesos internos, el nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar del candidato o los candidatas, según corresponda.”*

Preceptos violados: Artículos 1o., 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 35 fracción II, 40, 41 base I, 115 primer párrafo, 116 fracción IV, inciso b), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 1, 2, 16.1, 23, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Consideraciones jurídicas.

En efecto, es inconstitucional el deber de proporcionar por escrito los datos relativos al candidato o candidatas, porque a los candidatos de partidos políticos que

participan en coalición, o por sí mismos, no se les exige la misma información, sino hasta el período de presentación de solicitudes de registro de candidaturas.

A pesar de que tanto los aspirantes de estos como los de la candidatura común participan en sus procesos internos de selección de candidatura o candidaturas, se infringe el principio de igualdad de trato en relación con el de analogía, porque, ante supuestos iguales (hacer procesos internos y una vez conocido quiénes son las candidaturas electas) de cada partido, es que, sin importar la forma de asociación o participación, o su decisión de postulación individual, y no obstante estar en las mismas condiciones, de saber todos quiénes son ya sus candidatos y candidatas al concluir dichos procesos selectivos, el caso es que, de la norma en cuestión se infiere que, solo a unos (los de candidatura común) se les impone el deber señalado en la norma de la fracción II del artículo 81 bis 3., misma que conculca los artículos 10., 14, 16 y 41 base I entre otros de la Constitución.

Asimismo, lo ordenado en la fracción II del artículo 81 bis 3 de la ley electoral neoleonesa, infringe el derecho humano reconocido en los artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida que implica una distinción inadmisibles, al tratar desigual a quien sea candidato común una vez concluido el proceso interno que derive en su selección.

Porque en todo caso, habrá premura en el requerimiento de esa información, dado que el momento procesal natural para que sea proporcionada, es durante el período de solicitud de registro de candidaturas a los cargos de elección popular, es decir, todos parejos, dentro de un mismo plazo, y al inicio de la fase de inter campañas, como pretende la norma aplicar en el supuesto de candidaturas comunes, esto desfasa, respecto a unos y otros, el tiempo de proporcionar el nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar del candidato o los candidatos.

Aunado a esto, debe decirse que, al finalizar los procesos internos sigue la etapa en la cual los partidos políticos resuelven sus impugnaciones, y posteriormente la cadena impugnativa sigue en el tribunal electoral del estado, así como ante las Salas respectivas del TEPJF, por lo cual, hay desfase al anticipar la norma requisitos de una candidatura o candidaturas que en ese tiempo no están firmes. Lo cual contraviene el principio de certeza y de objetividad electorales.

En ese orden de consideraciones, si el artículo 144 de la Ley Electoral neoleonesa señala en su primer párrafo, fracciones I, II, III y V, que

“La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político, coalición o candidatura común que las postulen y (sic) los siguientes datos de los candidatos:

- I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;*
- II. Lugar y fecha de nacimiento;*
- III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;*
- IV. Clave única de Registro de Población;*
- V. Clave de Elector;*

(...)”

Entonces, carece de sentido que en el 81 bis 3 impugnado, diga el emisor de la norma, en su fracción II, que

“El convenio de candidatura común deberá contener: (...) La manifestación por escrito de proporcionar a la Comisión Estatal Electoral, una vez concluidos sus procesos internos, el

nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar del candidato o los candidatos, según corresponda, (...)”

Porque, entonces, o se exige dos veces a la candidatura común la presentación de esos datos o se está ante una antinomia, consistiendo la contradicción en el momento en que realmente deben proporcionarse esos datos.

Si ambas disposiciones se emitieron en el mismo decreto de 04 de marzo de 2022, entonces la solución de dicha contradicción normativa sería resuelta en su aplicación bajo el principio *pro persona*, o bien en interpretación conforme en el sentido de que, si se trata de datos que debe proporcionar una candidatura común, el tiempo oportuno y natural para ello es el de la presentación de la solicitud de registro de candidaturas y no antes, incluso no en el período inter campañas, aun cuando en esa fase hayan concluido los procesos internos de selección de candidaturas de los partidos políticos, sin que en todo caso exista obligación de dar a conocer los datos de la o las candidaturas seleccionadas, sino hasta el período común de registro.

En tales condiciones, y en razón de que el legislador, al emitir la norma impugnada infringió también los principios de certeza y de legalidad electorales, con vulneración de lo previsto en el artículo 116 fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, debe declararse la invalidez del artículo 81 bis 3 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

Lo cual solicito de ese Alto Tribunal.

SEXTO CONCEPTO DE INVALIDEZ, por el cual se impugna los artículos 207 fracción III y 218 fracción de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, que

Página 35 de 46

señala como obligaciones de los aspirantes y candidatos independientes registrados, entre otras cosas, porque les ordena:

- Abstenerse de recurrir a expresiones o utilizar en su propaganda ofensas, difamación o lo que denigre a otros aspirantes, precandidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas y terceros.
- Abstenerse de recurrir a las mismas expresiones o utilizar en su propaganda electoral, ofensas, difamación que denigre a otros candidatos, partido políticos, instituciones públicas.

Lo que se traduce en vulneración a la libertad de expresión en materia política entre partidos y candidaturas a cargos de elección popular e infringe los principios de certeza y legalidad electorales.

El precepto legal cuya porción subrayada se pide invalidar, dispone:

Artículo 207. Son obligaciones de los aspirantes registrados:

(...)

III. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, así como de recurrir a expresiones o utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a otros aspirantes, precandidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas y terceros;

(...)

Artículo 218. Son obligaciones de los candidatos independientes registrados:

(...)

XI. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, así como recurrir a expresiones o utilizar en su propaganda electoral cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnias que denigre a otros candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros;

(...)

Preceptos violados. Artículos 7o., 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 41 base III, apartado C, párrafo primero, 116 fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conexión con las normas previstas en los artículos 1, 2, 13, 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Consideraciones jurídicas.

En efecto, los artículos 207 fracción III y 218 fracción XI de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León son inconstitucionales al ordenar a los aspirantes registrados, abstenerse de recurrir a expresiones o utilizar en su propaganda ofensas, difamación o aquella que denigre a partidos políticos e instituciones públicas o privadas.

Ello es así porque la reforma de 10 de febrero de 2014, emitida por el Constituyente Permanente al artículo 41, base III, apartado C, de la Constitución federal establece que:

Artículo 41. [...]

[...]

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

[...]

De hecho, en relación con lo anterior, el artículo 7o. de la misma Constitución, al reconocer que

Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Evidentemente privilegia esa libertad, necesaria en el debate político, el pluralismo y el juego democráticos, es claro que la única expresión constitucionalmente prohibida es la de propaganda política o electoral calumniosa.

Luego, si existe libertad es claro que la previa censura está prohibida, en la medida que afecta esa libertad, que es uno de los pilares de la sociedad libre, y los contenidos deónticos previstos en los artículos 207 y 218 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

Si tales preceptos legales prohíben, *ex ante*, expresiones tales como: ofensas, difamación o denigraciones, y ordenan a los aspirantes y candidatos independientes abstenerse de utilizarlas en su propaganda o en su propaganda electoral, es indudable que tales disposiciones implican una suerte de censura previa, porque pretenden, en abstracto, calificarlas, por sí mismas, como si tuvieran esas características negativas.

El problema es que ante la posibilidad de que, respecto de la eventualidad de tales expresiones, al estar ordenada su abstención y prohibida su expresión, es claro que podrían dar lugar a sanciones por infracción a cualquiera de las normas electorales previstas en la ley.

Si bien es cierto que, en los artículos 380, numeral 1, inciso f) y 394, numeral 1, inciso i) de la LGIPE, hay contenidos normativos semejantes a los de los preceptos 207 y 218 cuya invalidez se solicita, ello en modo alguno puede impedir que se declare la invalidez de las normas locales, porque las normas de leyes generales susodichas, porque, en el presente caso el baremo o parámetro de validez es directamente la norma del artículo 41 base III, apartado C. párrafo primero en relación con la garantía establecida en el artículo 7o. de la Constitución: La libertad de expresión y la prohibición de la censura previa que las normas legales impugnadas comportan, en tanto coartan indebidamente la libertad de difusión de propaganda o de propaganda de campaña, en un estado de cosas que podría inhibir, por sí, el libre juego de ideas y el debate público propio de una sociedad democrática, ante la posibilidad de ser sancionados los actores políticos, sin causa válida.

Considero entonces que la ampliación, en ley, de la prohibición de calumnia a la de una expresión "que denigre", o que ofenda o difame a instituciones o a partidos políticos, en tanto estas personas morales no quedan amparados por la protección constitucional de no calumniar, que solo protege a las personas frente a propaganda política o electoral calumniosa, pero no así a la que difame o injurie u ofenda.

Estimar lo contrario implicaría tener que guardar silencio para no ofender, no difamar y no denigrar, no obstante que, al reformar la norma suprema nacional, se advierte que el Constituyente Permanente no quiso restringir excesivamente la libertad de expresión, y el callar en medio del debate político es, definitivamente, contrario a la democracia y al juego de la política y al pluralismo.

Por lo cual, las porciones normativas impugnadas de los artículos 207 y 218 impugnados, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León que ordenan a los aspirantes registrados y candidatos independientes registrados, abstenerse de incurrir en "ofensas, difamación" incluso contra "partidos políticos, instituciones públicas o privadas", infringe la libertad de expresión y puede estimarse una forma de censura previa que inhibe el debate democrático robusto en la contienda política electoral.

Lo cual infringe el contenido normativo de los artículos 7o., 41 base III, apartado C. primer párrafo de la Constitución, en relación con el derecho humano reconocido en el artículo 13, numerales 1 a 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como es notorio a ese Tribunal Constitucional, sobre la infracción y posible invalidez de las porciones normativas señaladas, existen pronunciamientos del Tribunal Pleno en el sentido

de inconstitucionalidad, al conculcar dicha norma legal el ejercicio de la libertad de expresión en materia política electoral.

De ahí que, aunado a los presentes razonamientos, solicito que al resolver esta acción de inconstitucionalidad, haga relatoría de los diversos asuntos en los cuales el máximo órgano jurisdiccional del país ha tratado el tema, y declarar fundados los conceptos de invalidez para los efectos que estimen conducentes.

SÉPTIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ, por el cual se impugna el artículo 239 fracción II de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, que regula en forma deficiente la forma válida de marcar las boletas electorales al suprimir del texto legal la frase “una cruz o” como marca que previo a su modificación establecía y al mantener otras menos comunes.

Lo cual se traduce en vulneración a los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, así como en infracción a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

La redacción de la fracción II del artículo 239 de la ley electoral estatal, cuya invalidez se plantea declarar en la porción normativa subrayada, o por deficiente regulación, dice:

Artículo 239. ...

(...)

II. El elector se ubicará detrás de la mampara de votación y de manera secreta, marcará con cualesquier señal como un círculo o sombreado que identifique de manera inequívoca la

intención de su voto en el círculo o recuadro que contenga el emblema del partido por el que vota y doblará la boleta ocultando el sentido de su voto;

(...)

Preceptos violados. Artículos 1o., 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 116 fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás preceptos y principios que se invocan en lo que sigue.

Consideraciones jurídicas.

En efecto, la norma impugnada, al suprimir la frase “una cruz o”, como señal expresa e inequívoca, además de tradicional de la emisión del voto y su intención, utilizada por la mayor parte de la ciudadanía al votar en cada ámbito de elección, implica infracción al principio de certeza y al de objetividad electoral, pues, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 144/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.

Para dar una idea de los contenidos previo y actual de la norma general cuya invalidez por deficiente regulación se sugiere declarar, transcribo en un comparativo ambas redacciones (seuo):

Texto anterior Artículo 239 fracción II LEENL	Texto vigente Artículo 239 fracción II LEENL
El elector se ubicará detrás de la mampara de votación y de manera secreta, marcará con una cruz o cualesquier señal como un círculo o sombreado que identifique de manera inequívoca la intención de su voto en el círculo o recuadro que contenga el emblema del partido por el que vota y doblará la boleta ocultando el sentido de su voto;	El elector se ubicará detrás de la mampara de votación y de manera secreta, marcará con cualesquier señal <u>como un círculo o sombreado</u> que identifique de manera inequívoca la intención de su voto en el círculo o recuadro que contenga el emblema del partido por el que vota y doblará la boleta ocultando el sentido de su voto;

Si bien, de acuerdo al diccionario y al uso común del lenguaje, por “marca” se entiende un término equivalente a la señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia.

Luego, “*cualquier señal*” puede ser no solo el círculo o sombreado que señala la indicada porción normativa, antes como opciones, ahora aparentemente reforzado por el legislador, y en ese entender las cosas podría concluirse que una cruz es también una señal o marca válida.

Sin embargo, no es cualquier señal, y la supresión de ese elemento del procedimiento de votación es esencial para que la intención inequívoca del votante se identifique de manera evidente en el conteo de los votos, por los operadores jurídicos que serán, en el caso, las personas del funcionamiento de las mesas directivas de casilla.

Con otras palabras, es de considerar que no hay signo o marca, señal, etcétera, que no muestre de modo más inequívoca la intención de votar en tal o cual sentido u opción electoral, que la marca de una cruz. A tal grado ha sido la efectividad de la marca en cruz en anteriores procesos comiciales que se tiende a identificar la "marca" con el de la "cruz" puesta por el elector en la boleta de votación, de modo que la marca y la cruz, que es una de las marcas, se identifican cual si fuese la única, pero ahora se suprime.

Bien es cierto que en la cultura cívica es indispensable que la ciudadanía conozca bien qué significa la marca o señal y cómo emitir el voto de manera que no haya duda en quienes contarán los votos y quienes los calificarán, por ejemplo en un recuento total o parcial.

Pero, si ahora se ejemplifica el acto de votar meramente como el sombreado o círculo que se puede poner en la boleta por el elector, ello podría dar lugar a situaciones conflictivas, porque de lo ya sabido, es decir la señal tradicional y forma de votar por anotonomasia, y eventualmente a tener falta de certeza, porque los decisores jurídicos podrían interpretar el asunto en el sentido de que, si fue suprimida esa frase breve pero significativa que es el relativo a la posibilidad de ejercicio del sufragio precisamente mediante una marca o cruz, es porque ha sido derogada, y podrían tener alguna duda sobre la aplicabilidad de las fases subsecuentes del procedimiento de votación.

En efecto, si el legislador tuvo la intención de ejemplificar en la porción normativa impugnada, qué se entiende por cualesquier señal, entonces debió preferir de manera enunciativa la marca en cruz, por ser la más popular hasta el presente.

Por ende, si el sombreado o círculo no tienen los alcances de ser representativos de una señal común entre los electores y su inclusión o permanencia aunada a la supresión de la marca o

señal puesta en forma de cruz, como es costumbre en la población, lo mejor sería dejar o invalidar la reforma para los efectos que correspondan, o suprimir también, por deficiente regulación, la referencia que indica la frase como un círculo o sombreado, a efecto de que se indique y se tenga plena certeza de que, cualesquier señal en la boleta marcada por el elector, en la forma que libremente elija, sea una forma válida de votar, sin pretender destacar algunas marcas que son de las menos comunes, cual si se les estuviese haciendo promoción.

En las relatadas condiciones, estimando fundado también este concepto de invalidez solicito se pronuncie, al respecto, ese Tribunal Pleno.

Afecto de acreditar lo anterior, y aunado a que se trata de hechos notorios, se ofrecen las siguientes

PRUEBAS:

1.- **LA DOCUMENTAL**, consistente en el periódico oficial del Estado de Nuevo León, publicado el viernes 04 de marzo de 2022, que contiene las normas generales impugnadas, y se puede visualizar en el siguiente enlace:

http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia/2015/Archivos/AC_0001_0007_00170400_000001.pdf

Prueba que se ofrece para acreditar la existencia, inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las normas generales impugnadas.

2.- **LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA**, en todo lo que sirva para estimar fundados los conceptos de invalidez en el presente medio de impugnación, consistente en las deducciones lógico jurídicas que se desprendan de las normas electorales, del ordenamiento jurídico y de los razonamientos que ese Tribunal Pleno construya a partir de los hechos

conocidos a fin de obtener la interpretación conforme o la invalidez de las normas generales controvertidas.

3.- **LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES**, consistente en todas las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente juicio, en todo lo que sirva para declarar fundados los conceptos de invalidez, así como las que, conforme al principio de adquisición procesal se relacionen con el presente asunto, en caso de acumulación.

Por lo expuesto y fundado, de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente solicito:

PRIMERO.- Tener a **MORENA** por interponiendo acción de inconstitucionalidad en los términos del presente escrito, y por reconocida la personalidad de quien suscribe; asimismo tener por designados y acreditados delegados en el presente asunto.

SEGUNDO.- En su oportunidad, dar vista a las autoridades responsables para enterarlos de esta impugnación y requerirlos para que rindan el informe a que se refiere el artículo 64 de la citada Ley Reglamentaria, desahogando el procedimiento respectivo.

TERCERO.- Dictar resolución, declarando la invalidez de las normas impugnadas, ante la falta de conformidad de las mismas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es Parte, sin perjuicio de interpretación conforme y pro persona, que en su caso procedieren.

LA ESPERANZA DE MÉXICO

MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO.

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

DE MORENA.

005851

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2022 ABR 4 AM 9 08

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibido por buzón judicial
con fecha abril 3-2022 - ex
46-fca 3, con:

- Anexo relativo a certificación
de registro, en copia simple ex
①-fca.

→ 5 traslados

